IV. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO

SALA PRIMERA

Sentencias

En la villa de Madrid a 15 de octubre de 1960: en el juicio declarativo de mayor cuantía seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza y ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de la misma capital, por don Francisco Gracia Fernández y don Francisco Gracia López, comerciantes y vecinos de Zaragoza, litigando en concepto de pobres, contra doña Josefa González Agüero, soltera, sin profesión especial y de la misma vecindad; sobre liquidación de cuentas en participación; pendiente ante nos en virtud de recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por los demandantes, representados por el Procurador don Crescenciano Girbel Duchas, con dirección del Letrado don Basilio Edo, sustituido en el acto de la vista por el también Letrado don Luis Rey Ardid, en nombre y representación de don Francisco Gracia Fernández y don Francisco Gracia López, formuló demanda de juicio declarativo de mayor cuantía, contra doña Josefa González Agüero, alegando como hechos:

RESULTANDO que ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Zaragoza y en escrito de fecha 13 de julio de 1953, el Procurador don Tomas Rey Ardid, en nombre y representación de don Francisco Gracia Fernández y don Francisco Gracia López, formuló demanda de juicio declarativo de mayor cuantía, contra doña Josefa González Agüero, alegando como hechos:

Primero. Que el demandante don Francisco Gracia Fernández, toda su vida dependiente en un almacén de tejidos, dejó de prestar sus servicios en los «Almacenes Morón» para establecerse en las mismas actividades que siempre ejerció, pero nuevas.

Segundo. Que la demandada, doña Josefa González de Agüero Sevilla, pactó el 1 de octubre de 1947 un contrato de cuentas en participación para la explotación del comercio que se abrió al público, destinado a la venta de tejidos, titulado «Lerpy», situado, en la calle del Coso, número 39, de aquella ciudad, con los actores, contrato que fué aportado como documento número 2 en las diligencias preparatorias.

Tercero. Que se constituyó la asociación con las siguientes aportaciones: doña Josefa González 330.000 pesetas, distribuidas en la siguiente forma: 144.000 que, según dijo, había satisfecho por el traspaso del local, estanterías, instalación y mobiliario, y 235.739,95 que, según también dijo, aportaba en metálico; don Francisco Gracia Fernández, 10.000 pesetas en metálico y su cooperación personal como encargado del establecimiento; don Francisco Gracia López, 5.000 pesetas en metálico y su cooperación personal como dependiente; y 5.000 pesetas de otro socio, además de la cooperación del mismo como dependiente.

Cuarto. Que doña Josefa González, además de la dirección exclusiva y total de la empresa que se le atribuía en el contrato, se reservó la facultad de nombrar un apoderado con una asignación mensual; y que se pactó también que los beneficios se repartirían en la siguiente forma: de las primeras 13.000 pesetas, don Francisco Gracia Fernández percibiría el 43 por 100; don Francisco Gracia López el 22 por 100; el otro partícipe la misma proporción y doña Josefa González el 13 por 100; haciéndose constar posteriormen-

te que desde la 13.001 pesetas en adelante, las participaciones serían: don Francisco Gracia Fernández, el 23,50 por 100; don Francisco Gracia López y el otro partícipe que actuaba como dependiente, el 12,50 por 100, y la doña Josefa González el 51,50 por 100.

Quinto. Que para la obtención del beneficio líquido se tenía que llevar un libro en el que, diariamente y con las relaciones de tales de caja, se anotarían las operaciones efectuadas cada día, y para anotar los gastos se llevaría otro libro con los encasillados correspondientes.

Sexto. Que las pérdidas, de haberlas, se repartirían proporcionalmente a las aportaciones dinerarias ya expresadas.

Séptimo. Que igualmente se fijaron las condiciones para disolver la asociación, los intereses a percibir por cada partícipe, el plazo de duración de dos años y la forma de liquidarse por doña Josefa González el activo y pasivo.

Octavo. Que los actores, el señor Gracia Fernández, como encargado de la tienda, y el señor Gracia López, como dependiente, tenían las llaves del establecimiento, que abrían diariamente desde que se inauguró hasta finales de 1948, en que el apoderado de la señora González alegó extravío de las llaves, cambió la cerradura y colocó un nuevo candado, no entregando llave alguna a los actores; y, viendo limitadas sus actividades, don Francisco Gracia López se despidió «voluntariamente», manifestando sus deseos de salirse de dicha asociación de cuentas, y el otro demandante, por enfermedad, tuvo que dejar de ir al comercio, pero realizando varias ventas aún en 7 de enero de 1949.

Noveno. Que era grande el interés que tenía doña Josefa González en dar por terminado el contrato de cuentas en participación, y así lo manifestó en todo momento su apoderado, quien dió entrada en el negocio a un tercero y realizó el inventario de final de año, no con los partícipes, como era lógico, sino con otras personas.

Décimo. Que los libros antes aludidos y toda la documentación del negocio eran llevados por doña Josefa González o su apoderado, actuando dicha señora como si se tratara de un negocio exclusivamente suyo.

Undécimo. Que doña Josefa González y su apoderado presentaron a los actores un estado de cuentas tan absurdo que no se podía admitir, pues éstos resultaban deudores a doña Josefa de las siguientes cantidades: don Francisco Gracia Fernández 22.031,42 pesetas, y don Francisco Gracia López de 4.939,40 pesetas.

Duodécimo. Que los actores realizaron varias gestiones amistosas conducentes a comprobar la realidad de la contabilización que se pretendía presentar como liquidación de beneficios, gestiones que no pudieron llevarse a cabo por negarse rotundamente el apoderado de la señora González a exhibirlas, particularmente, los libros, facturas y demás documentos que obraban en su poder.

Decimotercero. Que por el volumen de las ventas efectuadas, que fija por mensualidades desde el 5 de noviembre de 1947 a diciembre de 1948, el negocio realizado por «Tejidos Lerpy» había sido fabuloso.

Decimocuarto. Que en tal clase de establecimientos, cuando se adquiría directamente del fabricante, los márgenes de beneficio legal eran el porcentaje del minorista recargado con el tanto por ciento correspondiente al mayorista, es decir,

si el mayorista tenía un 15 por 100 y un 23 por 100 el minorista, el margen o beneficio legal era el de estos dos tantos por ciento sumados, y que acompañaba, bajo el número uno de documentos, oficio de la Delegación Provincial de Sindicatos en el que constaban los márgenes legales.

Decimoquinto. Que los actores intentaron la exhibición de libros y documentos a través de unas diligencias preparatorias, también con resultado negativo, pues tanto la señora González como su apoderado se negaron a exhibirlos; que también se opusieron al expediente de pobreza, y que la señora González no había comparecido al acto de conciliación, cuya certificación se acompañaba como documento número dos.

Decimosexto. Que los actores querían conocer las salidas que se daban con fechas 19 de octubre y 3 de noviembre de 1947, consistentes en 82.778,27 y 156.410,91 pesetas, según se decía, pagado por varias facturas, sin especificar cuantas fueran, a quien eran debidas o a que proveedores se referían.

Decimoséptimo. Que los géneros habían sido suministrados al establecimiento por los fabricantes y proveedores a los precios legales de tasa y con el margen y beneficio legal autorizado por los organismos competentes, remitiéndose a efectos de prueba a dichos fabricantes y proveedores y a los representantes, independientemente de la prueba pericial contable que sería precisa para que a la vista de todo emitiera su informe.

Decimoctavo. Que el dinero que entregaron los actores en el momento de constituirse la Sociedad lo fué para que, en cumplimiento del contrato social, produjera un justo y legal beneficio el interés legal del mismo. Invocó los fundamentos de derecho que estimó oportunos y suplicó que se dictara sentencia por la que se condenase a la demandada:

Primero. A que considerase rescindido el contrato de cuentas en participación que le dió origen.

Segundo. A rendir cuentas justificadas y pendientes entre la demandada y los actores.

Tercero. Al pago de las cantidades que sobre las bases anteriores resultasen a favor de los actores.

Cuarto. Mas a todas las costas causadas tanto en el expediente de diligencias previas que precedía a la demanda, como las causadas en este juicio.

Quinto. A devolver a los actores las aportaciones de cada uno y el interés legal pactado del 4 por 100.

Sexto. A pagar a los actores 25.000 pesetas como indemnización por los perjuicios irrogados a cada uno de ellos.

RESULTANDO que emplazada la demandada compareció en su nombre el procurador don José Luis Velasco, quien contestó y se opuso a la demanda exponiendo como hechos:

Primero a tercero. Que la demandada concertó un contrato de cuentas en participación con los demandantes, si bien figurando éstos con una insignificante participación de 10.000 y 5.000 pesetas, respectivamente, que apenas si suponía apoyo económico al establecimiento que se fundaba, y asoció a los demandantes con la esperanza de que éstos aportarían unos verdaderos conocimientos y un esmerado celo para que se obtuvieran beneficios en el negocio, y que como esto no se lograra se produjeron algunos rozamientos entre la demandada y su apoderado y los

demandantes y la desmoralización de éstos ante el poco éxito de su gestión, por lo que se ausentaron del negocio, dándose por rescindido el contrato de cuentas en participación, por incumplimiento de los demandantes.

Cuarto, quinto y sexto. Que era cierto que doña Josefa González tenía la dirección exclusiva y total de la empresa y el derecho a nombrar un apoderado con una asignación mensual, e igualmente lo que se refería al reparto de beneficios, según la copia del contrato aportado por los actores a las diligencias preparatorias instadas por los mismos sobre exhibición de libros, a las que se remitía a efectos probatorios, siendo también cierto la existencia en dicho contrato de una cláusula, la octava, sobre el libro a llevar para los posibles beneficios líquidos.

Séptimo. Que respecto a las condiciones para disolver la asociación, forma de liquidación, etcétera, se atenia en un todo a cuanto constaba en el contrato.

Octavo. Que estaba conforme en que, como se expresaba en el correlativo de la demanda, Francisco Gracia López se despidió voluntariamente, y Francisco Gracia Fernández, alegando enfermedad, no aparecía tampoco por el establecimiento.

Noveno. Que respecto al correlativo de la demanda se atenia a la prueba que se practicase.

Décimo. Que en cuanto al hecho décimo se remitía al contrato.

Undécimo y duodécimo. Que era cierta la liquidación presentada por la demandada y el saldo en contra de los demandantes, señalado el protocolo del notario don Juan Menéndez Santiso en el que obraban cartas, cuentas y liquidación a que se referían los actores, y que negaba a que se hubiese oposición por parte de la demandada a exhibir libros, notas, papeles, etcétera, del negocio, que estaban siempre a disposición de los demandantes.

Decimotercero a decimoctavo. Que respecto a cuanto se decía en los correlativos de la demanda, y que negaba todos los hechos de la demanda que no estuvieran conformes con los expuestos. Alegó los fundamentos de derecho que están aplicables y formuló reconvencción, basándola en los propios hechos de la contestación a la demanda y expresando, que si la liquidación de cuentas arrojaba un saldo a favor de la demandada de 22.081,42 pesetas por don Francisco Gracia Fernández y 4.039,49 pesetas por don Francisco Gracia López, los demandantes y reconvenidos debían abonársela a la demandada, terminando con la súplica de que se dictara sentencia por la que, absolviendo de la demanda a la demandada, se condenase a los actores y reconvenidos a abonarle el saldo en contra de pesetas 22.081,42 y 4.039,49 por don Francisco Gracia Fernández y don Francisco Gracia López, respectivamente, que resultara de la liquidación de cuentas de la asociación de cuentas en participación, con imputación de costas a los actores y reconvenidos.

RESULTANDO que la representación de los actores, al evacuar el traslado para réplica, insistió en sus alegaciones de hecho y de derecho de la demanda y suplico que se dictara sentencia que, absolviendo a los actores de la reconvencción formulada, contuviera todos y cada uno de los pedimentos del símplico principal de la demanda, y la representación de la demandada, en la súplica, mantuvo sus alegaciones y pretensiones de la contestación y reconvencción.

RESULTANDO que recibido el pleito a prueba se practicó a instancia de la parte actora la de confesión judicial de la demandada, que absolvió, bajo juramento indeclinable, las posiciones que le fueron formuladas, y la documental, consistente, entre otros, en los documentos acompañados a la demanda. Y a instancia de la parte demandada se practicó la de confesión judicial de los demandan-

tes, quienes absolviéron bajo juramento indeclinable las posiciones formuladas; documental, que consistió, entre otros, en los documentos acompañados a la contestación a la demanda y en testimonio del contrato de cuentas en participación entre actores y demandada, de 1 de octubre de 1947, en el que se establecen los siguientes pactos:

Segundo. Se forma esta asociación con las siguientes aportaciones: doña Josefa González de Agüero Sevilla, por la aportación de 380.000 pesetas en la siguiente forma: 144.000 que ha satisfecho por traspaso de local, estanterías, instalaciones y mobiliario, y 235.000,95 pesetas que aporta en metálico; don Francisco Gracia Fernández aporta la cantidad de 10.000 pesetas en metálico y su cooperación personal como encargado de la tienda; don Francisco Gracia López aporta 5.000 pesetas en metálico y su cooperación personal como dependiente de la tienda.

Tercero. Las referidas aportaciones constituyen en esta fecha el activo de la asociación, haciéndose constar que en esta misma fecha la asociación no tiene pasivo.

Cuarto. Doña Josefa González de Agüero Sevilla tendrá siempre la dirección exclusiva y total de la empresa, y en su virtud actuará como única propietaria de la hacienda social, teniendo facultad para vender, comprar, hipotecar, dar en garantía, ceder créditos, transigir, cancelar cuentas, aceptar, librar, endosar, avalar, ejercitar las acciones oportunas ante los Tribunales, ceder las aportaciones y beneficios y, en suma, ejecutar todas las acciones que exija tal dirección, como si se tratase de un negocio exclusivamente suyo.

Quinto. Se autoriza a doña Josefa González Sevilla para que por sí sola otorgue poderes tan amplios como sean necesarios para sustituirle en la dirección del negocio únicamente a don Celso Vellido Melendo.

Sexto. La contribución y toda clase de documentos figuraran a nombre exclusivo de doña Josefa González de Agüero Sevilla, la cual tendrá derecho en su calidad de gerente de la asociación a un emolumento fijo de 2.000 pesetas mensuales, el cual será llevado a los gastos generales de la asociación, no obstante si la señora González Agüero designase apoderado, en tal caso se determinará que dicha asignación de 2.000 pesetas mensuales sea la que constituya la asignación de dicho apoderado.

Séptimo. Los beneficios se repartirán en la siguiente forma: Don Francisco Gracia Fernández, de las primeras 13.000 pesetas de beneficios líquidos, percibirá el 43 por 100; don Francisco Gracia López, de las primeras 3.000 pesetas de beneficios líquidos, percibirá el 22 por 100; don de las primeras 13.000 pesetas de beneficios líquidos, percibirá el 22 por 100, y doña Josefa González de Agüero Sevilla, de las primeras 13.000 pesetas en beneficios líquidos percibirá el 13 por 100. De las 13.000 pesetas de beneficios obtenidas en adelante, las participaciones que cada uno percibirá serán las siguientes: Don Francisco Gracia Fernández, el 23,50 por 100; don Francisco Gracia López, el 12,50 por 100; don el 12,50 por 100, y doña Josefa González de Agüero Sevilla, el 51 por 100.

Octavo. Los beneficios líquidos se hallarán en la siguiente forma: Se llevará un libro en el que diariar ante y con las relaciones de tales de caja se anotaran las operaciones de caja efectuadas en el día con el precio de costo y de venta en proporción con las cantidades vendidas constituirá el beneficio bruto. De este beneficio bruto se descontarán los gastos invertidos para la explotación y desarrollo del negocio y las partidas incobrables y la diferencia constituirá el beneficio líquido repartible. Para anotar los gastos se llevará otro libro con los encasillados correspondientes. Las pérdidas, si las hu-

biera, se repartirán en la siguiente forma: Don Francisco Gracia López, en proporción a 5.000 pesetas; don Francisco Gracia Fernández, en proporción a 5.000 pesetas; don en proporción a 5.000 pesetas; y doña Josefa González de Agüero, en proporción a 380.000 pesetas.

Noveno. La asociación no se disolverá por el fallecimiento de ningún asociado. En dicho caso se entregará a sus herederos el importe de su aportación, más los beneficios correspondientes hasta el último día del trimestre pendiente de liquidación o deduciendo la pérdida correspondiente a dicha aportación, si la hubiere, y será baja como asociado desde el día de su fallecimiento. Únicamente se le concederá el derecho de pertenecer a la asociación a los herederos de doña Josefa González de Agüero Sevilla, hasta el segundo grado.

Décimo. Las aportaciones producirán en provecho de los respectivos partícipes en la cuenta el interés del 4 por 100 anual, que percibirá cada partícipe en proporción a su aporte, por trimestres vencidos, cuyo interés será llevado a los gastos de explotación de la participación.

Undécimo. No podrá ningún partícipe, excepto doña Josefa González de Agüero Sevilla vender, ceder ni hipotecar su participación en la asociación y caso de venta de algún importe tendrán derecho a preferencia los demás partícipes, por orden de cuantía. Doña Josefa González de Agüero Sevilla podrá vender, ceder, permutar la participación sin consentimiento de los demás partícipes en la cuenta, pero con obligación por parte de aquella de abonar a éstos sus respectivas participaciones y los beneficios correspondientes hasta el día de la venta o cesión, o descontadas las pérdidas, si las hubiere, sin que los partícipes puedan reclamar nada por ningún concepto.

Duodécimo. La presente asociación se constituye por el plazo de dos años prorrogables por otros dos si se avisa con el plazo de un mes de antelación a su terminación.

Decimotercero. A la extinción de la asociación que se constituye, lo mismo que en caso de disolución ocurrida por cualquier otra circunstancia, doña Josefa González de Agüero Sevilla conservará en su poder el establecimiento objeto de este contrato, así como todo el activo que de él dependa. El exceso del activo y del pasivo serán liquidados por doña Josefa González de Agüero Sevilla la suma de 380.000 pesetas, importe de su aporte. A don Francisco Gracia Fernández, la cantidad de 10.000 pesetas, importe de su aporte. A don la cantidad de pesetas 5.000, importe de su aporte. A don Francisco Gracia López la cantidad de 5.000 pesetas, importe de su aporte. El excedente será repartido entre los señores que componen la asociación en la siguiente forma: A don Francisco Gracia Fernández, el 23,50 por 100; a don Francisco Gracia López, el 12,50 por 100; a don el 12,50 por 100. Cualquiera de los asociados podrá, pasados los seis meses primeros siguientes a la fecha de este contrato, retirar su aportación y por tanto retirarse de la asociación, sin derecho, en tal caso, a reclamación económica de ninguna clase. Asimismo queda facultada, en virtud de este contrato, doña Josefa González de Agüero Sevilla para que pasados los seis primeros meses siguientes a la fecha de este contrato devuelva su aportación a cualquiera de los partícipes, avisándoles con dos meses de antelación a la terminación del trimestre pendiente de liquidación, quedando en tal caso el partícipe a quien se le devuelva su aporte fuera de la asociación desde aquel momento. La liquidación, en caso de disolución, deberá terminarse dentro de los treinta días siguientes, a contar del día de la disolución. Todas las cuestiones que se suscitaren entre doña Josefa González de Agüero Sevilla y sus partícipes referente a la cuenta serán sometidas

das a los Tribunales de Justicia de Zaragoza.» Y a la misma instancia se practicó prueba de exhibición de libros de comercio:

RESULTANDO que unidas las pruebas practicadas a los autos y evacuadas por las partes los traslados para conclusiones, para mejor proveer y con suspensión del término para dictar sentencia, se acordó que, estando conforme la parte demandada, se facilitase a los peritos designados los libros de comercio y demás documentación para que emitiesen el dictamen acordado, los cuales, previo estudio, informaron lo siguiente: Que los ingresos brutos importaron 125.214,75 pesetas; los gastos, 109.504,70 pesetas, y, por tanto, el beneficio líquido, 15.710,05 pesetas:

RESULTANDO que el Juez de Primera Instancia número 1 de Zaragoza, en 9 de agosto de 1954, dictó sentencia por la que, aceptando en parte la demanda, condenó a la demandada:

Primero. A que tuviera por resuelto y terminado el contrato de cuentas en participación convenido con los demandantes para la explotación del negocio de tejidos conocido por «Larwo», establecido en la casa número 89 de la calle del Caso, de Zaragoza.

Segundo. A tener por liquidación del negocio la practicada en el juicio por los peritos contables que en el mismo intervinieron.

Tercero. A abonar al demandante don Francisco Gracia Fernández la cantidad de 6.226,86 pesetas, y al otro demandante, don Francisco Gracia López, 3.198,75 pesetas, importe de sus respectivas participaciones en los beneficios del negocio de cuentas en participación.

Cuarto. A devolver al demandante don Francisco Gracia Fernández 10.000 pesetas y al otro demandante, don Francisco Gracia López, 5.000 pesetas, correspondientes a sus respectivas aportaciones iniciales al negocio de cuentas en participación.

Quinto. A abonar a ambos demandantes el interés legal del 4 por 100 anual de esas 10.000 y 5.000 pesetas, respectivamente, desde la fecha 25 de junio de 1952, y el mismo interés del 4 por 100 anual de las cantidades en que consistían sus respectivos beneficios a partir de la fecha de esta sentencia.

Sexto. Que no procedía hacer expresa imposición de costas.

RESULTANDO que admitida en ambos efectos la apelación que contra la anterior sentencia interpuso la representación de la demandada doña Josefa González de Agüero Sevilla, se elevaron los autos a la Audiencia Territorial de Zaragoza, ante la que se sustanció legalmente la alzada con intervención de las partes, las que, en el acto de la vista, solicitaron: La apelante, que se revocase la sentencia apelada en cuanto no accedía a la reconvencción articulada, accediéndose a lo en ella solicitado y confirmando el resto, con costas al contrario, y la apelada, la confirmación del fallo impugnado en todos sus extremos, con expresa condena de costas a la apelante:

RESULTANDO que la Sala de lo Civil de dicha Audiencia de Zaragoza, en 28 de mayo de 1955, dictó sentencia confirmando la apelada, a la que, supliendo la omisión en la misma, adujo los siguientes pronunciamientos:

Septimo. Condenó a don Francisco Gracia Fernández y a don Francisco Gracia López a que pasasen a doña Josefa González de Agüero Sevilla las sumas de 27.508,02 y 12.750,85 pesetas, respectivamente, compensándose hasta donde alcanzasen con las que debían percibir con cargo a los pronunciamientos anteriores, y

Octavo. Absolvió a ambas partes litigantes de las restantes pretensiones de contrario formuladas, sin hacer expresa condena de costas:

RESULTANDO que el procurador don Crescenciano Girbal Dueñas, en nombre y representación en turno de oficio, de

don Francisco Gracia Fernández y don Francisco Gracia López interpuso recurso de casación por infracción de ley, alegando los siguientes motivos:

Primero. Amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil. La doctrina de esta Sala que únicamente concede la Ley el recurso de casación contra la parte dispositiva de las sentencias y no contra sus considerandos (sentencias, entre otras, de 14 de abril de 1913, 11 de marzo de 1921, 9 de octubre de 1945 y 23 de enero de 1941), siendo ineficaz combatir los considerandos si no constituyen premisa obligada o antecedentes del fallo, pues es preciso que se justifique este por los fundamentos impugnados (sentencia de 14 de marzo de 1936, 15 de abril de 1940, 9 de marzo de 1941 y doce de abril de 1942), pero el fallo y parte dispositiva de una resolución judicial no es materia inerte que puede desovertarse de sus fundamentos, y su justicia o error no puede deducirse sin el estudio de la base que los genera, y así lo acredita el hecho de que cuando esta Sala declara haber lugar a un recurso de casación, estudia siempre los considerandos del fallo recurrido, en relación con los motivos de impugnación que en el recurso se alegan, resolviendo en este sentido definitivamente la cuestión: la sentencia de 29 de noviembre de 1949. La sentencia de 22 de noviembre de 1949 distingue entre los considerandos aquellos que tienen repercusión en el fallo, estimando que éstos se pueden aludir en el recurso de casación, sirviendo de base a la polémica en los motivos que contra la sentencia se aduzcan. En el presente pleito existe algo que debe destacarse, a fin de ambientarlo en términos de que se sitúe dentro de la ética, para la mejor comprensión. La demandada doña Josefa González de Agüero conocía que los demandantes prestaban en su comercio los servicios de dependientes, sometidos a una reglamentación de contrato, a cuyos beneficios renunciaron captados con ese contrato que se llama de «cuentas en participación», mediante el que aportaban 10.000 y 5.000 pesetas, respectivamente, para obtener unos beneficios, en las proporciones que en el documento se especificaban, con fecha primero de octubre de 1947, cuyo documento está unido a los autos. El recurso versa únicamente sobre si las cantidades que recibieron para poder subsistir los señores Gracia deben serles computadas en la liquidación, que pretende hacer valer la demandada, o por el contrario esas sumas deben quedar excluidas de tal liquidación, como pretenden los recurrentes, por estimarlo justo, ya que de lo contrario se llegaría al absurdo de que quienes perdieron sus colocaciones como dependientes de comercio y los beneficios de las leyes sociales, mediante las cuentas, que quiere hacer pasar por buenas la demandada, todavía, después de trabajar gratis, quedarían debiendo a la señora González cuantiosas sumas. De prospegar el procedimiento usado por la demandada sería burlar las Reglamentaciones de Trabajo, bastando para ello que se deslumbrase a los dependientes con un contrato de cuentas en participación, aportando sus ahorros, y después el propietario del comercio, usando y abusando de las facultades que el mismo pacto le reservó por imposición suya, hiciese trazar el negocio aparentemente, mediante el recargo de gastos inexistentes, para así desprenderse de su dependencia sin indemnización alguna, y al entenderlo así la sentencia recurrida infringe el artículo 1.281 del Código civil. La Sala sentenciadora, al interpretar el pacto de primero de octubre de 1947 y deducir del mismo que los anticipos percibidos por los señores Gracia debieron entrar en liquidación, incurrió con notorio error dicho contrato privado. Aunque la doctrina jurisprudencial no haya llegado a recoger íntegramente la tesis según la que

la interpretación, consistente, en todo caso, una cuestión de derecho, es lo cierto que, de conformidad con el criterio informador de las sentencias de 29 de abril de 1926 y 29 de noviembre de 1934, cuando tal interpretación se funda en la errónea inteligencia de los artículos 1.281 a 1.289 del Código civil, su interpretación debe basarse no en el número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino en el número primero, ya que se trata de conviar de los hechos probados sus consecuencias propias jurídicas (sentencias de 3 de julio de 1942, 26 de abril de 1926, 26 de noviembre de 1934, 1 de diciembre de 1942, 16 de febrero de 1942, 20 de abril y 1 de diciembre de 1944). La interpretación errónea que hace la Sala del documento por el que se constituyó, en 1 de octubre de 1947, la sociedad de cuentas en participación, resulta evidente si se tiene en cuenta que en verdadera sociedad suplen la aportación, por parte de doña Josefa González y de los señores Gracia de un capital que ha de ser explotado en común, mediante la experiencia comercial de los demandantes, para conseguir un lucro neto, que había de ser repartido en la siguiente forma: Don Francisco Gracia Fernández, de la 12.000 primeras pesetas de beneficio neto percibiría el 43 por 100; don Francisco Gracia López, el 22 por 100; otra parte, desconocida, la misma proporción, y doña Josefa González, el 13 por 100; haciéndose constar posteriormente que a partir de las 13.001 pesetas en adelante las participaciones serían: Don Francisco Gracia Fernández, el 23,50 por 100; don Francisco Gracia López y el otro partícipe desconocido, el 12,50 por 100, y doña Josefa González, el 51 por 100. Prescindiendo de que los peritos, al redactar su informe, no tuvieron a la vista todos los documentos necesarios, como se deduce de sus manifestaciones, y por tanto quedaron sin justificar unos supuestos pagos por una de 20.000 pesetas, se advierte en dicho informe que estimaron que no podía entrar en juego en la liquidación las cantidades recibidas por los señores Gracia para atender a las más apremiantes necesidades de la vida, y el Juzgado falló dando por resuelto el contrato, por liquidado el negocio en la forma que los peritos contables lo llevaron a cabo, y condenó a doña Josefa González a pagar al demandante don Francisco Gracia Fernández la cantidad de pesetas 6.226,82, y el otro demandante, don Francisco Gracia López, 3.198,75 pesetas, importe de sus respectivas participaciones en los beneficios del negocio de cuentas en participación, y también a devolver a ambos señores sus aportaciones de 10.000 y 5.000 pesetas, con los intereses legales en la forma consignada en el apartado quinto del fallo; sentencia que fue confirmada por la Audiencia, con la adición de condenar a los señores Gracia a pagar las sumas percibidas como adelanto, estimando con ello parte de la reconvencción formulada por la demandada. El fundamento de tal fallo dice que de lo actuado se desprende que los demandantes, en el hecho desconocido de su demanda, manifestaron ser cierto que habían percibido el señor Gracia Fernández pesetas 27.508,02 y el señor Gracia López 12.750,85 pesetas, que fueron retirando para poder ir viviendo modestamente en los quince meses en que trabajaron en el negocio, y teniéndolo en cuenta que del estudio del contrato desprendió que los señores Gracia no adquirirían derecho alguno a la obtención de sueldo o remuneración por su trabajo personal en el negocio, debían computarse las cantidades percibidas en la liquidación que se efectuase respecto a los decaídos que la sentencia de primera instancia reconocía a cada uno de los actores. Pero presuntamente el contrato de primero de octubre de 1947, al no consignar ningún evento referido al cobro de cantidades como re-

muneración del trabajo, no puede interpretarse en el sentido que lo hace la Audiencia, ya que el silencio respecto a este punto ha de surtir efecto contrario, o sea el reconocimiento por parte de la demandada de que esas cantidades eran retiradas con su consentimiento y en el concepto de pago de su trabajo y, por ello, eran totalmente independientes de la liquidación de beneficios y de la devolución de los capitales aportados. La sentencia recurrida procede que sea casada en este sentido, devolviendo todo su vigor y eficacia al fallo del Juzgado, por cuanto en el considerando primero de la Audiencia se reconoce que ambas partes litigantes están conformes con la sentencia recurrida, en cuanto afecta a la acción entablada por los señores Gracia, solicitando la señora González en el acto de la vista la confirmación de dicha resolución cuanto a lo pedido en la demanda.

Segundo. Amparado en el número céptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Por error de derecho y de hecho en la apreciación de la prueba.

A) El error de derecho consiste en la infracción de lo dispuesto en el artículo 1.253 del Código civil. La sentencia de 3 de mayo de 1944 autoriza la impugnación, al amparo de este artículo, de la apreciación de la prueba, como elemento básico de la deducción o la falta de enlace lógico entre este elemento y el hecho deducido, y la de 23 de febrero de 1943 mantiene la doctrina de que la Sala de casación puede censurar el juicio lógico que la instancia formule, cuando notoriamente falta, como dice este artículo, el enlace preciso y lógico entre el hecho demostrado y el que se trata de deducir, según las reglas del criterio humano y en aquellos casos en que se articule como presunción lo que no pasaba de conjetura, pudiendo declarar infringido este precepto. Esto es lo que hace precisamente la Sala sentenciadora en el fallo recurrido, al deducir que como el documento de primero de octubre de 1947 no contenía pacto de remuneración de trabajo se deducía de este silencio que el pacto no existía. Pero pugna con la presunción que la Sala obtiene en los hechos que la demandada, que conocía perfectamente el desarrollo del negocio, por sí o por su apoderado, consintió la retirada de cantidades por los actores «para que éstos pudieran vivir», ya que empleaban su actividad íntegramente en el comercio, y si también conocía, como ella afirma, que las ganancias eran mínimas, resulta una contradicción evidente que autorizase la retirada de cantidades muy superiores a los porcentajes que en caso de beneficios pudieran corresponder a los demandantes. El enlace ha de consistir en la conexión y congruencia entre ambos hechos, de suerte que la realidad del uno conduzca al conocimiento del otro, por la relación entre ellos concordante y no poder aplicarse a varias circunstancias (sentencias de 12 de noviembre de 1904, 17 de mayo de 1913, 5 de marzo de 1931, 17 de mayo de 1941 y 12 de abril de 1942). No existe el hecho básico que supone la Sala como fundamento de su fallo, puesto que deduce del documento de primero de octubre de 1947, que sin decirlo se vean privados los actores de su legítimo trabajo, lo que pugna con la ética, con la justicia distributiva y con la prueba de presunciones que ampara el artículo 1.253 del Código civil.

B) Error de hecho, deducido del propio documento de primero de octubre de 1947, al que se llama de cuentas en participación y al que se supone que tiene la virtud de privar de la remuneración de trabajo a los actores, que venían prestando en el comercio como dependientes y que, lógicamente, de algo tenían que vivir. Son documentos auténticos, a efectos de casación, aquellos que por sí mismos hacen prueba de su contenido, sin necesidad de deducciones, analogías, interpretaciones o hipótesis (sentencias

de 18 de abril de 1944 y 21 de junio de 1946). El contrato privado de primero de octubre de 1947, reconocido por ambas partes como legítimo, según el artículo 1.225 del Código civil, tiene el mismo valor que la escritura pública, entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes. Aceptado por ambas parte dicho contrato, al no decir nada referente a la remuneración del trabajo de los actores, que antes eran dependientes de aquel comercio, hay que deducir que tal silencio no les condenaba a muerte por inanición en el caso de no existir beneficios, y así lo entendió la propietaria del negocio, doña Josefa González, autorizando al padre y al hijo a retirar cantidades para que pudieran vivir, conociendo la situación económica del negocio, según afirma reiteradamente al contestar la demanda, por cuya razón reconocía que eran cosas independientes la remuneración del trabajo de los actores y los derechos a los beneficios y a la devolución de sus aportaciones. No cabe justificar la apreciación de la Sala en la apreciación de la prueba «en conjunto»; citando a este respecto el alegante la opinión del comentarista don Manuel de la Plaza en su obra «La Casación Civil».—Las sentencias de 7 de julio de 1900, 15 de enero de 1917 y 5 de marzo de 1943, entre otras, han tratado de recuperar para esta Sala el examen íntegro de las pruebas, sentando que es loable criterio el de rehuir dar como base a las apreciaciones de la del conjunto de las pruebas practicadas en el juicio.—Por lo dicho, resulta constatado el error de hecho y de derecho cometido por la Sala al apreciar la prueba:

RESULTANDO que, admitido el recurso por la Sala e instruida la parte recurrente, única personada, se declararon conclusos los autos, mandándose traer a la vista, con las citaciones correspondientes, previa formación de nota:

VISTO, siendo Ponente el Magistrado don Francisco Eyre Varela:

CONSIDERANDO que, admitiendo que el problema de la interpretación de los contratos puede traerse a debate en este trámite de casación por el cauce del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con invocación de la infracción, por interpretación errónea, del artículo 1.231 del Código Civil, siempre será de necesidad para que el recurso sea estimable que se acredite el mencionado error; y como en el caso que se examina este error no se descubre en la sentencia recurrida, en la cual se estudia el contrato causal del pleito para sentar la conclusión de que debe el recurrente abonar las cantidades que en concepto de anticipo retiró del negocio, cuya explotación, participación de capital y reparto de beneficios se pacta en el mismo por cuanto no se deduce de él que se estipulara sobre otras retribuciones que no fueran el interés del capital aportado y la participación en las ganancias, es visto que el Tribunal «a quo» usó debidamente de las facultades interpretativas que le otorga el precepto mencionado, y por ello y porque, en todo caso, el recurrente sólo discurre con su particular y subjetivo criterio, que no puede sobreponerse al desinteresado del juzgador, el cual, aun en caso de duda, debe prevalecer, se demuestra la improcedencia del primer motivo del recurso:

CONSIDERANDO que el segundo motivo se ampara procesalmente en el número séptimo del artículo 1.692, mediante la alegación de que la Sala sentenciadora incurrió en error de hecho y de derecho, éste porque se infringe el artículo 1.253 del Código Civil referido a las presunciones, por cuanto la Sala, con criterio lógico, deduce del hecho de no haberse pactado en el antes referido contrato algo sobre la retribución del trabajo, que esa retribución no era debida, pero en primer lugar el contrato pacta en favor del recurrente y su hijo beneficios en los que perfectamente hay que entender se

comprende la retribución de tal trabajo, pues eso se explica y resulta expresamente desde el momento que se comprometen a prestarlo y únicamente como correlativa prestación se estipula un interés del capital aportado, que los hace copartícipes en el negocio, y una relativa cuantía la participación en los beneficios que mal se corresponden con la proporcionalidad del capital que interesan, y, en segundo lugar, aunque se admite que el tema de la lógica e ilógica deducción que permite suscribir el indicado precepto, puede traerse a este trámite por la vía utilizada, siempre resulta que conforme a lo expuesto la conclusión inferida es acertada y debe ser amparada frente al razonamiento subjetivo del propio recurrente que también utiliza otra presunción arbitraria que intenta derivar de la ocupación y profesión anterior desempeñada por el mismo por ser perfectamente conocida de la recurrida, totalmente ineficaz para fundar este motivo, y, en último término, este problema, en realidad, viene embebido en el motivo anterior examinado sobre la interpretación del contrato; y, en cuanto a aquél, o sea el error de hecho, basta indicar que el único documento o acto auténtico que esgrime para fundamentario consiste en el propio contrato que se viene designando como de cuentas en participación, básico del pleito y objeto de anterior examen, excluido a los efectos que se persiguen del carácter que se le atribuye para fundar este motivo, según es doctrina constante de esta Sala de casación, y el cual, todavía si no fuera así, no demostraría el error que se invoca referido en síntesis a la supuesta remuneración del trabajo en lo que se funda la resistencia a que se integre en la liquidación sentenciada esos anticipos objeto de discusión, por lo que también debe desestimarse este motivo, y con él el recurso íntegramente, con todas sus consecuencias.

FALLAMOS que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación por infracción de Ley interpuesto a nombre de don Francisco Gracia Fernández y don Francisco Gracia López, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza, con fecha 28 de mayo de 1955, en los presentes autos, condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas causadas en este Tribunal Supremo; y librase a la expresada Audiencia la cartificación correspondiente, con devolución del apuntamiento que remitió.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», pasándose, al efecto, las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. (Entre líneas: suscitar. Vale.)—Juan Serrada.—Francisco Eyre Varela.—Francisco Bonet.—Odilio Siboni Cuenca.—Manuel María Cavanillas. (Rubricados.)

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Francisco Eyre Varela, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, celebrando audiencia pública la misma en el día de su fecha, de que certifico.—Ramon Morales. (Rubricado.)

SALA QUINTA

Secretaría

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado, y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mismo, que por don José Galvez Velardo y treinta más se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre resolución por la que tácitamente se confirma por parte del Ministerio de Agricultura la que la Dirección

General del Instituto Nacional de Colonización dictó en 4 de julio de 1960, respecto de los llamados premios triesterales conforme a la Orden de 16 de julio de 1952, pleito al que han correspondido el número general 4.020 y el 170 de 1960 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con la prevención de que si no comparecieron ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público, en cumplimiento de providencia fecha 11 de noviembre de 1960.

Madrid, 12 de noviembre de 1960.—El Secretario, Isidro Almonacid.—5.025.

• • •

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado, y de quienes tuvieren interés directo en el mantenimiento del mismo, que por doña Trinidad Matute López se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre Orden del Ministerio de Educación Nacional de 28 de diciembre de 1959, sobre quinquenios a partir del 16 de julio de 1946, pleito al que ha correspondido el número general 4.613 y el 174 de 1960 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con la prevención de que si no comparecieron ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público, en cumplimiento de providencia fecha 11 de noviembre de 1960.

Madrid, 12 de noviembre de 1960.—El Secretario, Isidro Almonacid.—5.026.

• • •

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado, y de quienes tuvieren interés directo en el mantenimiento del mismo, que por don Rafael Ruiz Sánchez y don Manuel Sánchez González se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre Orden del Ministerio de Educación Nacional de 28 de diciembre de 1959, sobre exclusión de los beneficiarios de quinquenios a los recurrentes, pleito al que han correspondido el número general 4.599 y el 172 de 1960 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con la prevención de que si no comparecieron ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público, en cumplimiento de providencia fecha 11 de noviembre de 1960.

Madrid, 12 de noviembre de 1960.—El Secretario, Isidro Almonacid.—5.027.

• • •

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado, y de quienes tuvieren interés directo

en el mantenimiento del mismo, que por don Antonio Arbelaitz Zaldúa se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de julio de 1960, sobre provisión de expendedorías de tabaco, lotería y surtidores de gasolina, pleito al que ha correspondido el número general 4.503 y el 171 de 1960 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con la prevención de que si no comparecieron ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público, en cumplimiento de providencia fecha 11 de noviembre de 1960.

Madrid, 12 de noviembre de 1960.—El Secretario, Isidro Almonacid.—5.028.

• • •

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado, y de quienes tuvieren interés directo en el mantenimiento del mismo, que por doña Elena Saldaña Ortega, doña Francisca Geonaga Amundarain, doña María Asunción Ortega Puentes y don Miguel de Diego Moreno se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de julio de 1960, sobre provisión de expendedorías de tabaco, lotería y surtidores de gasolina, pleito al que han correspondido el número general 4.590 y el 170 de 1960 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con la prevención de que si no comparecieron ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público, en cumplimiento de providencia fecha 11 de noviembre de 1960.

Madrid, 12 de noviembre de 1960.—El Secretario, Isidro Almonacid.—5.029.

• • •

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado, y de quienes tuvieren interés directo en el mantenimiento del mismo, que por don Miguel Camino Marcellach se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre Resolución de la Presidencia del Gobierno de 8 de julio de 1960, sobre jubilación acordada por la Comisión Liquidadora de Organismos en 24 de febrero de 1960 respecto del personal de la denominada Comisión o Servicio de la Madera, pleito al que han correspondido el número general 4.398 y el 183 de 1960 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con la prevención de que si no comparecieron ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público, en cumplimiento de providencia fecha 11 de noviembre de 1960.

Madrid, 12 de noviembre de 1960.—El Secretario, Isidro Almonacid.—5.030.

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado, y de quienes tuvieren interés directo en el mantenimiento del mismo, que por don Vicente López Muñoz se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre Resolución de la Dirección General de Mutilados de Guerra por la Patria de 12 de agosto de 1960, que desestimó repetición contra su solicitud denegada de ingreso en el Cuerpo de Mutilados con la calificación de permanente II, pleito al que han correspondido el número general 4.611 y el 174 de 1960 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con la prevención de que si no comparecieron ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público, en cumplimiento de providencia fecha 10 de noviembre de 1960.

Madrid, 12 de noviembre de 1960.—El Secretario, José Benítez.—5.031.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

BARBASTRO

Don Juan Codera Benavent, Juez Comarcal de esta ciudad en funciones del de Primera Instancia de Barbastro y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita expediente para declaración de fallecimiento de don Enrique Monzó Herrero, mayor de edad, casado con doña Josefa Cunill Llonch, hijo de Salvador y de Dolores, natural de Valencia y vecino últimamente de Barbastro, que desapareció en los meses de julio o agosto de 1926, fecha esta desde la que no se tuvieron noticias de su paradero, sin que sea conocido en la actualidad.

Dado en Barbastro a veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta.—El Juez de Primera Instancia accidental (legible).—El Secretario (legible).—5.048.

1.º 22-11-1960

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto por el señor Juez de Primera Instancia del Juzgado número once de los de esta ciudad, en providencia de fecha seis de mayo del corriente año, dictada en el expediente sobre extravío de valores, instado por don Joaquín de Solá Morales, se expide el presente edicto, por el cual se publica la denuncia de extravío o sustracción de cincuenta acciones de la Sociedad «Canal de Urgel» de las siguientes características: Ocho títulos, números 202.209, de una acción, de 500 pesetas de valor nominal cada una de ellas; seis títulos, números 1724 25, 1144 46, 1170, de dos acciones, de quinientas pesetas de valor nominal cada una de ellas; seis títulos, números 2632, 2108 109, 2111, 2651, 2737, de cinco acciones, de quinientas pesetas de valor nominal cada una de ellas; propiedad todas ellas del referido instante del expediente, don Joaquín de Solá Morales.

Y se señala el término de ochenta días, dentro del cual podrá comparecer el tenedor o titulares de los referidos títulos a contradecir la expresada denuncia, oponiéndose a la misma, bajo apercibimiento, en otro caso, de pararse el consiguiente perjuicio.

Barcelona, siete de mayo de mil novecientos sesenta.—El Secretario, Federico Sainz de Robles.—5.031.

LA BAÑEZA

Don Luis Fernando Rúa Rico, Juez de Primera Instancia de La Bañeza y su partido,

Hace saber: Que en la sección correspondiente del juicio universal de quiebra del comerciante don Leoncio Alvarez Martínez, titular del nombre comercial «Aceitera Bañezana», vecino de esta ciudad, se ha acordado sacar a primera y pública subasta, por resolución de esta fecha, los bienes siguientes:

Lote primero (Mercaderías):

Diecinueve sacos conteniendo 324 kilogramos de manzanilla, a 40 pesetas kilogramo: 12.960 pesetas.
 Dos sacos conteniendo 67 kilogramos de tila en rama, a 53 pesetas kilogramo, pesetas 3.551.
 Diez sacos conteniendo 149 kilogramos de flor de malva, a 26 pesetas kilogramo, 3.574 pesetas.
 Un saco conteniendo 19 kilogramos de genciana, a 16 pesetas kilogramo, 304 pesetas.
 Un saco conteniendo 15 kilogramos de liquen, a 12.50 pesetas kilogramo, 187.50 pesetas.
 Diez sacos conteniendo 315 kilogramos de manzanilla, a 42 pesetas kilogramo, 13.230 pesetas.
 Dos sacos conteniendo 22 kilogramos de anises, a 17 pesetas kilogramo, 374 pesetas.
 Un saco conteniendo 11 kilogramos de clavo, a 125 pesetas kilogramo, 1.485 pesetas.
 Dos sacos conteniendo 32 kilogramos de cominos, a 14 pesetas kilogramo, 448 pesetas.
 Un cajón conteniendo paquetitos de tila, 600 pesetas.
 Novecientos paquetitos de manzanilla, a 0.75 pesetas, 675 pesetas.
 Diez kilogramos de flor de tila, a 53 pesetas kilogramo, 530 pesetas.
 Cuarenta cajitas de flor de malva, a 0.75 pesetas, 30.
 Una lata conteniendo pimienta molida, 300 pesetas.
 Una lata conteniendo clavo molido, 330 pesetas.
 Una lata conteniendo cominos, 125 pesetas.
 Varios paquetes de azafrán en polvo, 500 pesetas.
 Treinta y cinco cajas de 100 carteritas cada una, de canela en rama, a una peseta carterita, 3.500 pesetas.
 Veinte paquetes de 100 carteritas cada uno, de canela en rama, a una peseta carterita, 2.000 pesetas.
 Treinta y un paquetes de 100 carteritas cada uno, de pimienta en rama, a una peseta carterita, 3.100 pesetas.
 Veinte botes conteniendo canela molida, 1.900 pesetas.
 Diez cajas conteniendo anís en rama, 525 pesetas.
 Veinte paquetes de 10 carteritas cada uno, de clavo molido, a una peseta carterita, 2.000 pesetas.
 Suma este lote, salvo error 52.573.50 pesetas.

Lote segundo:

6.417 kilogramos de harina de algodón, en 67 envases, a cinco pesetas, 32.085 pesetas.
 9.881 kilogramos de harina de pescado, en 161 envases, a 10.50, 103.750.50 pesetas.
 62.889 kilogramos de harina pepita uva, en 150 envases, a 1.50, 94.348.50 pesetas.
 10.500 kilogramos torta palmiste, en 211 envases, a tres pesetas, 31.650 pesetas.
 83.569 kilogramos bagazo palmiste, en 1.199 sacos, a tres pesetas, 250.707 pesetas.
 19.960 kilogramos bagazo coco, en 247 sacos, a 4.50, 89.820 pesetas.

4.460 kilogramos bagazo de linaza, a seis pesetas kilogramo, 26.760 pesetas.
 1.080 kilogramos bagazo algodón, en 12 sacos, a 4.59 pesetas, 4.960 pesetas.
 16.000 kilogramos aproximadamente de sal común, a 250 pesetas Tm., 4.000 pesetas.
 Suma este lote, salvo error, 637.981 pesetas.

Lote tercero:

Noventa y tres fardos de sacos vacíos, nuevos, conteniendo 25 sacos cada fardo, a 17 pesetas saco, 39.525 pesetas.
 Setenta y siete fardos, conteniendo 20 sacos vacíos cada uno, nuevos, a 17 pesetas, 22.780 pesetas.
 Tres fardos conteniendo 20 sacos vacíos cada uno, a 15 pesetas, 900 pesetas.
 Catorce fardos conteniendo 20 sacos vacíos cada uno, a 12 pesetas saco, pesetas 3.360.
 Suma este lote, salvo error, 56.565 pesetas.

Lote cuarto:

Once bidones con 2.025 kilogramos de barniz, incluido envase, a 15 pesetas, 31.275 pesetas.
 Cincuenta y tres bidones, conteniendo 9.354 kilogramos de aguarrás, incluido envase, a nueve pesetas kilogramo, 84.186 pesetas.
 Dos bidones, conteniendo 339 kilogramos de secante, incluido envase, a 15.50 pesetas kilogramo, 5.085 pesetas.
 Nueve bidones, conteniendo aceite de linaza, tipo Stand-Oil, con un peso de 1.927 kilogramos, con envase, a 20 pesetas, 38.540 pesetas.
 Veintitrés bidones, conteniendo aceite vegetal, con un peso de 4.712 kilogramos, incluido envase, a 20 pesetas kilogramo, 94.240 pesetas.
 Dos bidones, conteniendo 66 litros de aceite lubricante, a 26 pesetas litro, 1.716 pesetas.
 Tres bidones, conteniendo 663 kilogramos de aceite de linaza, incluido envase, a 26 pesetas kilogramo, 13.260 pesetas.
 Tres bidones, conteniendo 468 kilogramos de aceite de linaza, incluido envase, a 26 pesetas kilogramo, 12.658 pesetas.
 Un bidón, conteniendo 50 kilogramos de grasa consistente a 26 pesetas kilogramo, 1.300 pesetas.
 Cuatro latas de aceite lubricante, con 64 litros, a 26 pesetas litro, 1.664 pesetas.
 Diecisiete latas de ocho kilogramos cada una, de aceite de linaza cocido, a 27 pesetas kilogramo, 3.672 pesetas.
 Suma este lote, salvo error, 287.596 pesetas.

Lote quinto (Material de almacén):

Dos básculas de 500 kilogramos de fuerza cada una, a 2.000 pesetas, 4.000 pesetas.
 Una báscula «Pibernato» de 1.200 kilogramos de fuerza, 12.000 pesetas.
 Cinco carretillas de madera, tres de hierro, de mano, todas usadas, y una carretilla con tres ruedas, 850 pesetas.
 Tres bombas de mano, para trasegar, a 150 pesetas una, 450 pesetas.
 Cuatro balas usadas, a 10 pesetas cada una, 40 pesetas.
 Una garrafa vacía, de cinco litros, pesetas 17.
 Varios moldes de madera, 100 pesetas.
 Varios botes metálicos vacíos, 250 pesetas.
 Varios frascos de muestras y envases, 50 pesetas.
 Ciento diez latas envasadas, de ocho kilogramos, en cajas de madera, 2.310 pesetas.
 Veintiuna cajas de madera, vacías, para contener dos latas, 315 pesetas.
 Setenta y una cajas de madera, vacías, para contener una lata, 639 pesetas.
 Cincuenta y cuatro cajas de madera,

conteniendo dos latas vacías, de 17 kilogramos cada una, 4.050 pesetas.

Veinticuatro cajas de madera, conteniendo una lata de 17 kilogramos cada una, vacías, 614 pesetas.

Setenta y seis latas vacías de 17 kilogramos, usadas, a 20 pesetas, 1.520 pesetas.

Dos elevadores de madera, a 200 pesetas uno, 400 pesetas.

Un rollo de lona para el elevador, 200 pesetas.

Un tino de madera con blanco-España, 150 pesetas.

Varios botes de pintura, 25 pesetas.

Un montante de madera desarmado, 50 pesetas.

Suma este lote, salvo error, 28.030 pesetas.

Lote sexto (Muebles y enseres):

Un armario con luna central, de una puerta, 600 pesetas.
 Una mesita de noche, con piedra de mármol, 100 pesetas.
 Tres sillas, 150 pesetas.
 Ocho cuadritos, 30 pesetas.
 Dos mesitas de noche y aparato de luz, 900 pesetas.
 Dos sillones y descalcificadoras tapizadas, 700 pesetas.
 Una silla tapizada, 300 pesetas.
 Un crucifijo, 75 pesetas.
 Dos cortinones, visillos y araña, 900 pesetas.
 Una mesita de noche y un aparato de luz, 275 pesetas.
 Dos descalcificadoras tapizadas, 300 pesetas.
 Un armario de tres cuerpos, 1.000 pesetas.
 Un despertador pequeño, de esfera luminosa, 175 pesetas.
 Un mueble bar, de 90 centímetros de alto, 800 pesetas.
 Un florero de cristal, 75 pesetas.
 Un tresillo compuesto de sofá y dos sillas tapizadas de pana verde, 3.500 pesetas.
 Una mesita centro, piedra mármol, 400 pesetas.
 Dos apliques de pared, 150 pesetas.
 Seis visillos y un toldón de cortinón, 250 pesetas.
 Un cenicero, 8 pesetas.
 Una maleta de cuero, 400 pesetas.
 Dos butacones de pana, 700 pesetas.
 Una mesa centro de madera, 100 pesetas.
 Dos sillones de mimbre, 70 pesetas.
 Un florero de cristal decorado, 75 pesetas.
 Un espejo de 60 por 40, 800 pesetas.
 Varias figuras de adorno, 100 pesetas.
 Una papelería de madera, 40 pesetas.
 Dos cortinones de panilla y otros dos de estamin y dos visillos, 2.000 pesetas.
 Una imagen del Corazón de Jesús, 200 pesetas.
 Una lavadora eléctrica «Telefunken», 1.000 pesetas.
 Un frigorífico marca «Nevada», número 695, 9.000 pesetas.
 Una camilla con dos sillas, 100 pesetas.
 Diferentes efectos para uso de cocina, 150 pesetas.
 Un mostrador de madera y piedra de mármol, 6.500 pesetas.
 Una mesa de madera con piedra de mármol, 1.500 pesetas.
 Una caja de ciudades marca «Zubigarray», 16.000 pesetas.
 Un árbol perchero, 50 pesetas.
 Dos cuadros de adorno, 20 pesetas.
 Un cubo, cajón y estantería seis anaqueles 800 pesetas.
 Una estufa de mano de diez peldaños, 250 pesetas.
 Una estantería mostrador, 300 pesetas.
 Una mesa de madera con tablero cartón-piedra, 400 pesetas.
 Un armario de persiana, 1.500 pesetas.
 Una mesa de escritorio, de nueve cajones, con cristal, 3.000 pesetas.
 Un taburete de madera, 50 pesetas.

Una mesa para máquina de escribir, de dos cajones, con cristal, 1.000 pesetas.

Una mesa de madera pequeña con dos estantes, 600 pesetas.

Un cenicero, 15 pesetas.

Una mesa pequeña máquina de escribir, con dos cajones y cristal, 1.000 pesetas.

Un taburete de madera, 25 pesetas.

Una mesa pequeña de madera, con tres cajones y un estante interior, 400 pesetas.

Una mesa de madera con tablero de cartón-piedra y dos estantes, 800 pesetas.

Un armario con puerta de cristal y cuatro estantes, 700 pesetas.

Un armario de madera, de persiana, 1.500 pesetas.

Un archivador o fichero metálico, marca «Metab», 3.500 pesetas.

Una mesa de escritorio con nueve cajones, 3.000 pesetas.

Seis sillas, 300 pesetas.

Una estufa eléctrica, 150 pesetas.

Un extintor de incendios marca «J.V.C.», 500 pesetas.

Un cajón pequeño vacío, 10 pesetas.

Una estantería pequeña de madera, 300 pesetas.

Una estantería pequeña con herramienta, 50 pesetas.

Un picacho, 10 pesetas.

Una escalera de mano de siete peldaños, 350 pesetas.

Una escalera de mano de nueve peldaños, 360 pesetas.

Una macheta pequeña, 10 pesetas.

Una estantería con diferentes herramientas, 50 pesetas.

Una librería con cinco departamentos, 300 pesetas.

Una mesa pequeña para multcopista, 400 pesetas.

Una mesa para máquina de escribir, 300 pesetas.

Un reloj de pared para la cocina, 350 pesetas.

Suma este lote, salvo error, 71.823 pesetas.

Lote séptimo (Material de oficina):

Un aparato sistema control, 485 pesetas.

Un perforador para archivar, 30 pesetas.

Un tampón usado, 15 pesetas.

Una máquina pequeña de grapar madera, 50 pesetas.

Un pesa-cartas, 30 pesetas.

Un portasetos de dos pisos, 55 pesetas.

Ciento dos libros rayados de contabilidad, 2.000 pesetas.

Una multcopista marca «Delgoprint», 3.500 pesetas.

Una imprentilla, 25 pesetas.

Tres ficheros y archivadores, con fichas en blanco, 150 pesetas.

Una escribanía deteriorada, 25 pesetas.

Una máquina de escribir marca «Hispano-Olivetti», L-60, con tabulador, en buen estado, 6.500 pesetas.

Otra máquina de escribir «Hispano-Olivetti», L-30, con tabulador, en buen estado, 6.500 pesetas.

Una máquina calculadora eléctrica, de carro, marca «Hispano-Olivetti», con mesa «Invelec», 24.500 pesetas.

Suma este lote, salvo error, 43.915 pesetas.

Lote octavo (Vehículos):

Un coche turismo marca «Austin», modelo A-90, matrícula ML-4958, incluida la batería, 130.000 pesetas.

Un camión marca «Pegaso», de 6.000 kilogramos, con radio, colchón y mantas, calzado y rueda de repuesto, matrícula verde M-5624, 450.000 pesetas.

Un camión marca «Chevrolet», matrícula CE-3658, calzado, una lona y una marmota 80.000 pesetas.

Una motocicleta marca «Guzzi», matrícula LE-5526, 9.000 pesetas.

Una bicicleta, 300 pesetas.

Una rueda, una batería vieja y bayetas, 1.593 pesetas.

Suma este lote, salvo error, 670.893 pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado el día veintinueve de diciembre próximo, a las once y media de su mañana, previniéndose a los licitadores: Que la subasta se efectuará por lotes separados, conforme queda expresado, sirviendo de tipo el de la valoración fijada para cada uno de ellos, no admitiéndose posturas que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo; que para tomar parte en la subasta deberán consignar en la mesa de este Juzgado, o en el establecimiento destinado al efecto, el diez por ciento, por lo menos, del referido tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos; que el remate podrá hacerse a calidad de cederlo a un tercero, y que los bienes objeto de subasta podrán ser examinados en las dependencias de la quiebra.

Dado en La Bañeza, a veinticinco de septiembre de mil novecientos sesenta.—El Secretario (ilegible).—El Juez de Primera Instancia, Luis Fernando Roa Rico, 2.572.

MADRID

En el Juzgado de Primera Instancia número 9 de esta capital, y con el número 328 de 1960, se siguen autos de procedimiento hipotecario a instancia de la Compañía Mercantil «Banco Ibérico, Sociedad Anónima», representada por el Procurador don Alejandro García Yuste, contra don Manuel Fernández Larrinoa Iurrate y su esposa, doña Begoña Linaza Urrutia, sobre cobro de un crédito hipotecario de 1.000.000 de pesetas, intereses y costas; autos en los que por providencia de esta fecha se acordó sacar a pública subasta el caudal hipotecado marca «Mack», matrícula SE-20.081, número de motor, 686-15-19; número de bastidor NR 4D11039D; número de cilindros, seis; potencia en caballos, 43,78 fiscales; permiso de circulación de tercera categoría B, expedido en Sevilla el 5 de abril de 1948; toneladas de carga máxima autorizada, 15.

Dicha subasta se celebrará en la Sala de Audiencia de este Juzgado, a las doce horas del día 10 de diciembre próximo, sirviendo de tipo a la misma el precio pactado de 1.250.000 pesetas, debiendo los licitadores para tomar parte en la misma consignar previamente en la mesa del Juzgado el 15 por 100 del expresado tipo, sin que se admitan posturas inferiores al precio pactado.

Los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla segunda del artículo 82 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria de 16 de diciembre de 1954 se hallan de manifiesto en la Secretaría del Juzgado.

Dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecientos sesenta.—El Juez de Primera Instancia (ilegible).—El Secretario (ilegible).—3.652.

Por el presente, que se expide cumpliendo lo dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número cinco de Madrid, en los autos de procedimiento judicial sumario promovidos a instancia de don Francisco García Rodríguez, hoy por subrogación de don Juan Arjona Trapote, representado por el Procurador señor Monteserín, contra doña María de Gracia Velarde, se anuncia a la venta en pública subasta por segunda vez la siguiente:

«Rústica.—Tierra en término de Granátula de Calatrava, al sitio de Vieca-

maras, denominado también Puente y Casa Esquina, que se halla cruzada por el camino que conduce de Calzada a Moral de Calatrava y por el llamado de los Almendros. Tiene una superficie de ciento veintitrés hectáreas tres áreas y ochenta centiáreas, de cuya cuantía se destinan a labor cuarenta y una fanegas, diez a viña y el resto a pastos, existiendo dentro de su perímetro una granja para la explotación de gallinas y ganado de cerda, con una extensión superficial de una hectárea, de la que corresponde a la parte edificada mil quinientos metros cuadrados, y las restantes ochenta y cinco áreas, rodeadas de una cerca, están plantadas de árboles frutales. Linda, al Norte, finca de José Joaquín Colomer Sandoval; al Sur, tierras denominadas Los Basteros y el camino de las Rochas; al Este, olivares de Dolores Ledesma y Renualdo Donoso y tierras de don José Joaquín Colomer y doña Concepción Echevarría; y al Oeste, olivares de vecinos de Granátula de Calatrava y tierras de don Luis Colomer Sandoval. En esta finca se ha construido recientemente un pozo con sus correspondientes instalaciones.»

Y se advierte a los licitadores que para su remate, que tendrá lugar en este Juzgado número cinco, sito en la calle General Castaños, número uno, se ha señalado el día veintisiete de diciembre próximo, a las doce horas, que el tipo de subasta será el de tasación, es decir, la cantidad de seiscientos mil pesetas, rebajada a veinticinco por ciento, no admitiéndose posturas que no cubran el expresado tipo; que para tomar parte en el acto deberán consignar previamente en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público destinado al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 10 por ciento efectivo del referido tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos; que los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaría; que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate, el cual podrá hacerse a calidad de ceder.

Dado en Madrid a diez de noviembre de mil novecientos sesenta.—El Juez de Primera Instancia (ilegible).—El Secretario (ilegible).—3.663.

En virtud de providencia dictada en el día de hoy por el señor don José María Salcedo Ortega, Juez de Primera Instancia del número seis de esta capital, se ha tenido por solicitada la declaración de suspensión de pagos deducida por el Procurador don Luis Pozas Granero, en nombre y representación de la Compañía Mercantil Anónima «Varpa, S. A.», establecida en esta capital, calle Libertad, número ocho, y dedicada a la construcción; habiéndose decretado la intervención de todas sus operaciones, pero conservando dicha entidad la administración de sus bienes y gerencia de su negocio, con el concurso de los Interventores designados don Miguel Vargas Sánchez, don Domingo Varela Martín y don Modesto Antón; y además, también se ha acordado hacer pública y notoria esta resolución por general conocimiento de todos los acreedores de la referida entidad «Varpa, Sociedad Anónima», por medio del presente edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y de esta provincia, así como en el diario «A B C», y fi-

jacción en el tablón de anuncios del sitio público de costumbre de este Juzgado.

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos sesenta.—El Juez de Primera Instancia, J. M. Salcedo.—El Secretario (ilegible).—8.636.

ORIHUELA

En virtud de lo ordenado por el señor Juez municipal de esta ciudad en providencia dictada en el día de la fecha, en las diligencias de juicio de faltas número 60 960, sobre lesiones a Rosario Ruiz Ballester, se cita al denunciado Pedro Guarnán García, de veintinueve años de edad, hijo de Pedro y de Paula, soltero, mecánico, vecino de Vicálvaro (Madrid), calle Lago Constanza, número 94, y en la actualidad se encuentra en Alemania, a fin de que el día 29 de diciembre próximo y hora de las once comparezca ante la Sala Audiencia de este Juzgado Municipal, sito en plaza de Abastos, para asistir a la celebración del corriente juicio de faltas, previniéndole que si no comparece ni alega justa causa para ello, le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho, advirtiéndole que podrá apoderar a persona que presente en aquel acto las pruebas de descargo que tuviera, todo ello al amparo del artículo octavo del Decreto de 21 de noviembre de 1952.

Orihuela (Alicante) a quince de noviembre de mil novecientos sesenta.—El Secretario, Casero Gutiérrez Lorano.—5.048.

PINA DE EBRO

Don José Gonzalo de la Huerta Fidalgo, Juez de Instrucción de Pina de Ebro y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pieza de responsabilidad civil subsidiaria de la causa 23 de 1940 por muerte, lesiones y daños, y en ella, y por providencia de fecha del presente, he acordado llamar por edictos a los individuos que se relacionarán a los efectos de percibir las indemnizaciones acordadas en la mencionada causa y que se detallarán, por ser desconocido el paradero de los mismos, para que comparezcan ante este Juzgado de Instrucción por sí o con poder suficiente, y una vez hayan acreditado su personalidad y el legítimo derecho que les correspondiera para la percepción de la indemnización de referencia, se procesa a la cámara del resguardo de la sucursal en Zaragoza de la Caja General de Depósitos correspondiente, de la autorización en este Juzgado para hacerlo efectivo y de un testimonio de la providencia en que se acordó el pago. Les individuos y cantidades de referencia son:

1. Jaime Meseguer Vidal, cuyo último domicilio fué Barcelona, calle La Nau, 10, tercero; quinientas pesetas.
2. Antonio Fernández Jimaras, cuyo último domicilio fué Castrillo-Tejerigo; quinientas setenta pesetas.
3. Estefanía Sancho Martínez, cuyo último domicilio fué Barcelona; cuarenta pesetas.
4. Genaro Martínez Iglesias, cuyo último domicilio fué Madrid, calle García-sol, 4; ochocientas pesetas.
5. José Fina Bernace, cuyo último domicilio fué Barcelona, calle Sagrado Corazón, número 5, Santa; ciento diez pesetas.
6. Fany Sánchez Martínez, cuyo último domicilio fué Santa Eulalia de Riu-primer, Barcelona; ciento veinte pesetas.
7. Angel Lasala Calzada, cuyo último domicilio fué Paris XI, rue de Grand

Piuró, Francia; treinta y cinco mil pesetas, a repartir con sus hermanos, herederos de don José Lasala Graella.

8. Manuel Montero Naharro, cuyo último domicilio es Aranda de Duero, Carretera Estación, 22; setenta mil pesetas, como hijo de Manuel Montero y Francisca Naharro, fallecidos en el accidente.

Asimismo se llama por el presente, a fin de que se ratifique a la presencia judicial en el escrito de renuncia remitido por la Comisión de valores ferroviarios del Estado, respecto a las indemnizaciones acordadas a favor de «ligo» a su favor, a don Salvador Fernández Vallés y su madre política, doña Serafina Gubau, cuyo último domicilio fué en Villanueva y Geltrú, como herederos de don Joaquín Gros Gubau.

Dado en Pina de Ebro, a quince de noviembre de mil novecientos sesenta.—El Juez de Instrucción, José Gonzalo de la Huerta Fidalgo.—El Secretario (ilegible), 4.632.

SALAMANCA

En virtud de lo acordado por su señoría en providencia de esta fecha dictada en expediente de suspensión de pagos número 106 de 1960, promovido en este Juzgado por el Procurador don Eduardo Fabián Bacas, en nombre y representación de don Manuel Perretta Blanco, mayor de edad, viudo, industrial y vecino de Salamanca, domiciliado en Corrales de Morroy, número 21; por la presente se cita a los acreedores del mismo que se hallan en paradero ignorado para que el día 5 de diciembre próximo, a las once horas de su mañana, comparezcan ante este Juzgado en forma legal para asistir a la Junta de acreedores señalada para dicho día y hora, bajo apercibimiento de que de no verificarlo les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que la citación acordada tenga lugar, expido la presente en Salamanca a 7 de noviembre de 1960.—El Secretario (ilegible).—3.619.

VALDEORRAS

El Juez de Primera Instancia del partido de Valdeorras,

Anuncia la tramitación del expediente número 48 de 1960 instado por José Rodríguez González, de Villamartin, sobre declaración de fallecimiento de su padre Nicamor Rodríguez Rodríguez, hijo de Jacobo y Marcelina, natural y vecino de dicho Villamartin, casado con Anaclata González Alonso, que marchó para Cuba en 1902, careciendo de noticias desde 1964.

Barco de Valdeorras, 2 de noviembre de 1960.—El Juez de Primera Instancia (ilegible).—El Secretario, W. Valdivieso, 3.649. 1.ª 22-11-1960

VICH

En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia de este partido, se hace saber que en este Juzgado se ha iniciado expediente a instancia de doña Lucía Prat Bover sobre declaración de fallecimiento de su tío don José Bover Cavaçons, mayor de edad, soltero, natural de Torelló, hijo de Segismundo y de Concepción, que desapareció en la madrugada del día 13 de octubre de 1943, con motivo del desbordamiento de los ríos Ter y Ges, sin que se hayan tenido noticias del mismo.

Dado en Vich a 23 de septiembre de 1960.—El Secretario (ilegible).—8.632. 1.ª 22-11-1960

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir en las demás responsabilidades legales de no presentarse los procesados que a continuación se expresan en el plazo que se les fija, a contar desde el día de la publicación del anuncio en este periódico oficial, y ante el Juzgado o Tribunal que se señala se les cita, llama y emplaza, encargándose a todas las autoridades y Agentes de la Policía Judicial procedan a la busca, captura y conducción de aquéllos, poniéndolos a disposición de dicho Juez o Tribunal, con arreglo a los artículos correspondientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Juzgados Civiles

FERNANDEZ OCHOA, Martin; de treinta años de edad, hijo de Julián y de Maria, obrero agrícola, natural de Puebla de Montalbán y vecino de Villaluenga de la Sagra, calle Arrabal, y en la actualidad en ignorado paradero; procesado en causa 216 de 1960 por robo; comparecerá en término de diez días ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Albacete.—(3.894).

GIL CALVO, Miguel; natural de Tazona, casado, de cuarenta años de edad, hijo de Gregorio y de Mercedes, domiciliado últimamente en la calle del Bruch, número 8, 4.ª, 2.ª; procesado en causa número 452 de 1960 por abandono de familia.—(3.896); y

LLUCH BATLLE, Dolores; natural de Barcelona, casada, de veintitrés años de edad, hija de Fulgencio y de Dolores, domiciliada últimamente en la calle Baja de San Pedro, 15, 4.ª, 1.ª; procesada en causa número 452 de 1960 por abandono de familia.—(3.897);

Comparecerán en término de diez días ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.

ANULACIONES

Juzgados Civiles

El Juzgado de Instrucción de San Fernando deja sin efecto la requisitoria referente al procesado en causa número 84 de 1955, Nemesio Muñoz Itazozqui.—(556).

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid deja sin efecto la requisitoria referente al procesado en sumario número 267 de 1960, Pedro Gil Madorrán.—(3.948).

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid deja sin efecto la requisitoria referente al procesado en sumario número 113 de 1959, Luis García Domínguez.—(3.949).

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid deja sin efecto la requisitoria referente al procesado en sumario número 203 de 1959, Fernando Calonge Valero.—(3.950).

El Juzgado de Instrucción de Almodóvar del Campo deja sin efecto la requisitoria referente al procesado en sumario número 213 de 1955, Alejandro Ayuso Agueda.—(3.859).

EDICTOS

Juzgados Civiles

Pablo Fidel Lancha-García; de dieciséis años de edad, soltero, hijo de Pablo Fidel y de Purificación, natural de Almadén (Ciudad Real) y domiciliado últimamente en dicha localidad, calle Calvo Sotelo, número 12, y en Madrid, en el «Hogar Cuartel de la Montaña»; comparecerá ante este Juzgado Comarcal el día veintiséis de noviembre actual y hora de las diecisiete, a celebrar juicio de faltas en su contra, seguido por hurto.

Almadén, 12 de noviembre de 1960.—El Juez comarcal, Silverio Martín.—3.985.